



Rama Judicial
República de Colombia

Santiago de Cali, veintidós (22) de julio de dos mil veinte (2020)

Auto Interlocutorio No. 296

RADICACIÓN: 76001-33-31-006-2008-00097-01
ACCIÓN: EJECUTIVO
DEMANDANTE: MIGUEL FERNÁNDEZ SARRIA
DEMANDADO: DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

MAGISTRADO PONENTE: VÍCTOR ADOLFO HERNÁNDEZ DÍAZ

ASUNTO: Auto decide conflicto de competencias judiciales (Art. 158 del CPACA)

I. OBJETO DE LA DECISION

Procede la Sala Plena de esta Corporación a resolver el conflicto negativo de competencia suscitado entre el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Cali y el Juzgado Diecinueve Administrativo del Circuito de Cali, para asumir el conocimiento del proceso de la referencia.

II. ANTECEDENTES

2.1. Del trámite del proceso ejecutivo

La presente demanda ejecutiva fue radicada el 17 de abril de 2008 (fl. 41).

Mediante **Auto No. 474 del 18 de julio de 2008**, el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Cali, ordenó librar mandamiento de pago a cargo del Departamento del Valle del Cauca y a favor del ejecutante, por el valor de \$37.453.023 (fl. 44-45).

El Departamento del Valle del Cauca, interpuso recurso de reposición en contra de la anterior providencia, presentando la excepción de inexistencia de título ejecutivo.

Mediante **Auto No. 695 del 07 de noviembre de 2008**, el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Cali, decidió:

RADICACIÓN:
ACCIÓN:
DEMANDANTE:
DEMANDADO:
Pág. No. 2 de 10

76001-33-31-006-2008-00097-0
EJECUTIVO
MIGUEL FERNÁNDEZ SARRIA
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA



"Reponer para Revocar el auto ejecutivo No. 474 de 18 de julio de 2008, mediante el cual se libró mandamiento de pago a cargo del Departamento del Valle del Cauca.

Declarar terminado el proceso.

Decretar la cancelación de la medida previa de embargo y secuestro de suma de dinero. (...)" (fl. 87-88).

En contra de la anterior providencia, la parte demandante interpuso recurso de apelación, el cual fue concedido a través de Auto de Sustanciación No. 508 del 28 de noviembre de 2008 (fl.160).

Esta Corporación en providencia No. 007 del 19 de enero de 2010, decidió revocar la providencia apelada y ordenó que el Juzgado de origen librará mandamiento de pago (fl. 172-181).

En tal virtud, el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Cali en **Auto Interlocutorio No. 294 del 18 de junio de 2004**, libró el mandamiento de pago nuevamente a cargo de la entidad demandada por la suma de \$11.142.882,06(fl. 185-191).

El apoderado de la parte demandante presentó recurso de reposición y subsidio apelación contra la providencia anterior, con el fin de que se revoque la misma y se ordene continuar con el trámite del proceso desde el momento en que el Juzgado libró el mandamiento de pago inicial (fl. 192-195).

En **providencia No. 354 del 29 de julio de 2010**, el Juzgado de origen decidió no reponer su decisión y, en consecuencia, concedió el recurso de apelación interpuesto en contra del Auto Interlocutorio No. 294 del 18 de junio de 2004 (fl. 201-204).

Sin embargo, este Tribunal mediante Auto No. 567 del 30 de agosto de 2011, realizó todo un análisis de la providencia equivocada y en consecuencia, su decisión fue revocar el **Auto Interlocutorio No. 695 del 07 de noviembre de 2008** (fl. 211-218).

Con ocasión a que no hubo pronunciamiento sobre la providencia recurrida, el Juzgado de origen mediante Auto No. 649 del 12 de octubre de 2011, remitió nuevamente el expediente al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, con el objeto de que resolviera el recurso de apelación interpuesto contra el Auto Interlocutorio No. 294 del 18 de junio de 2010(fl. 221-223).

Ahora bien, el proceso fue recibido por este Tribunal el 27 de octubre de 2011 (fl. 226); med ante Auto del 20 de abril de 2012, se solicitó a la entidad que allegara la liquidación de la pensión de jubilación del demandante, con el fin de resolver el asunto (fl. 227). Solo fue hasta el 13 de junio de 2012 que la Gobernación del Valle del Cauca se pronunció, presentando escrito en el que solicitó la

RADICACIÓN: 76001-33-31-006-2008-00097-0
 ACCIÓN: EJECUTIVO
 DEMANDANTE: MIGUEL FERNÁNDEZ SARRIA
 DEMANDADO: DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
 Pág. No. 3 de 10



suspensión del proceso y el levantamiento de las medidas cautelares por haberse acogido al Acuerdo de Reestructuración consagrado en la Ley 550 de 1999 (fls. 231-233).

Mediante providencia del 29 de junio de 2012 el proceso fue remitido a los Despachos que conocen del régimen jurídico anterior al previsto en la Ley 1437 de 2011 (fl. 251), correspondiéndole por reparto a la magistrada Dra. Luz Stella Alvarado Orozco (fl. 253), sin embargo, mediante Oficio del 08 de octubre de 2012, se declaró impedida por haber conocido previamente del proceso en la primera instancia (fl. 254).

Es así que en Auto No. 062 del 09 de abril de 2013, el M.P. Dr. Carlos Arturo Grisales, se pronunció en relación con la solicitud de la entidad demandada decidiendo suspender el proceso al igual que el embargo decretado (fls. 260-262).

Después de varias remisiones del expediente dentro de la Corporación, finalmente el expediente le correspondió al Despacho de la Magistrada María Andrea Taleb Quintero (fl. 328), sin que se realizará ninguna actuación habida cuenta de que el proceso estaba suspendido.

Sin embargo, en los últimos años se presentaron varias solicitudes de la entidad demandada, y en tal virtud, el magistrado a cargo procedió mediante Auto Interlocutorio No. 295 del 29 de mayo de 2018, a pronunciarse al respecto:

“Así las cosas, la providencia sobre la cual debe pronunciarse este Despacho corresponde al Auto Interlocutorio No. 294 del 18 de junio de 2010, por la cual el Juzgado de origen dispuso librar mandamiento de pago a cargo del Departamento del Valle del Cauca y a favor del señor Miguel Fernández Sarria, por la suma de \$11.142.882,06 (...)

Es decir, que en esta medida, el mandamiento de pago no se encuentra en firme, pues existe controversia en cuanto a que si se debe seguir el trámite del presente proceso ejecutivo desde el Auto No. 695 del 07 de noviembre de 2008 o si por el contrario, a partir de la providencia No. 294 del 18 de junio de 2010; **decisión que no puede tramitarse por encontrarse suspendido el presente proceso ejecutivo con ocasión al Acuerdo de Reestructuración de pasivos de la Ley 550 de 1999 celebrado entre el Departamento del Valle del Cauca y sus acreedores.**

En este sentido, en relación con las solicitudes radicadas por el Departamento del Valle del Cauca, se indica lo siguiente:

(...) En este sentido, procede el levantamiento de las medidas cautelares decretadas dentro del presente proceso y la consecuente devolución de los títulos judiciales respectivos.

Sin embargo, se advierte que en esta instancia no puede pronunciarse al respecto, como quiera que los dineros embargados con ocasión a las medidas cautelares decretadas se encuentran a cargo del Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Cali, razón por la cual, se ordenará remitir el expediente a esa

RADICACIÓN: 76001-33-31-006-2008-00097-0
ACCIÓN: EJECUTIVO
DEMANDANTE: MIGUEL FERNÁNDEZ SARRIA
DEMANDADO: DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
Pág. No. 4 de 10



dependencia judicial, exhortándosele para que se pronuncie respecto de las solicitudes obrantes a folios 304-305, 306-307 y 330 del expediente, radicadas por el Departamento del Valle del Cauca, en los términos de lo advertido en la presente providencia y con aplicación de las reglas y normas que rigen la materia.

En este punto, se advierte que, para todos los demás efectos, el presente proceso ejecutivo continúa suspendido, y que, por tanto, una vez el Juzgado resuelva sobre el levantamiento de las medidas cautelares, el expediente quedará a cargo del mismo, hasta que el Departamento del Valle del Cauca le cancele la acreencia a la parte ejecutante, lo cual conllevará a la terminación del presente proceso, o por el contrario, hasta cuando finalice el plazo de ejecución del Acuerdo de Reestructuración sin que se le cancele la acreencia al ejecutante, momento para el cual, deberá el Juzgado remitir nuevamente el expediente a esta instancia para que se continúe con el trámite del mismo, esto es, para que obre pronunciamiento en relación con el recurso presentado en relación con el mandamiento de pago". (fls. 345-349).

2.2. Del conflicto de competencia

Con ocasión de lo anterior, encontrándose el expediente en el **Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Cali**, ese Despacho profirió Auto de Sustanciación No. 918 del 28 de junio de 2018, dentro del cual resolvió "Declarar la falta de competencia" para el conocimiento del proceso, bajo los siguientes argumentos:

"(...) se reitera que la demanda ejecutiva fue presentada en vigencia del Decreto 01 de 1984, estando de esta manera sometida al sistema escritural, careciendo de competencia éste Despacho por esa potísima razón.

(...)

Así las cosas, al estar tramitándose el proceso de la referencia, las decisiones que se deban tomar deben ser resueltas por los juzgados que continúan con el trámite de los procesos escriturales y no por este Despacho, pues este Juzgado solo conoce de procesos presentados en el sistema oral". (fls. 351-352).

Habiéndole correspondido por reparto el proceso al **Juzgado Diecinueve Administrativo del Circuito de Cali**, el despacho profirió Auto del 12 de julio de 2018, mediante el cual declaró la falta de competencia para conocer de la presente demanda ejecutiva con base en lo siguiente:

"(...)

En cuanto a los procesos ejecutivo al Juzgado 19 Administrativo del Circuito de Cali solo le compete en virtud del factor de conexidad, conocer de los procesos que se adelantan con fundamento en las sentencias proferidas por el mismo, pero no de aquellas demandas que se instauran a fin de ejecutar las sentencias que fueron emitidas por otros Despachos, entre ellos los extintos juzgados de descongestión o en su defecto por el Honorable Tribunal Contencioso Administrativo por la falta de creación en su momento de los Juzgados Administrativos.

Así pues, se tiene que el proceso ordinario de NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO con radicado No. 2002-0287 fue admitido y conocido por el HONORABLE TRIBUNAL CONTENCIOSO DEL VALLE DEL CAUCA, dictando sentencia en el año 2004, fecha en la cual no estaban conformados los Juzgados Administrativos para conocer de primera instancia, luego para hacer efectiva dicha sentencia por medio de apoderado

RADICACIÓN: 76001-33-31-006-2008-00097-0
 ACCIÓN: EJECUTIVO
 DEMANDANTE: MIGUEL FERNÁNDEZ SARRIA
 DEMANDADO: DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
 Pág. No. 5 de 10



judicial el señor MIGUEL FERNANDEZ SARRIA instauró demanda ejecutiva en el año 2008, año en el cual ya existían los Juzgados Administrativos, correspondiéndole por reparto al JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO DE CALI admitiéndolo y llevando el curso del proceso hasta el presente año, es decir, hasta el día 28 de junio de 2018 en el cual decidió declararse incompetente para seguir conociendo dicho asunto por el solo argumento de ser escritural, ordenando el envío del expediente a reparto y que fuera asignado alguno de los dos únicos juzgados mixtos" (fl. 356).

Por lo anterior, el expediente fue devuelto al **Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Cali**, el cual a través del Auto de Sustanciación No. 1126 del 14 de agosto de 2018, resolvió "*Por Secretaría remítase el presente expediente al Juzgado Diecinueve (19) Mixto Administrativo del Circuito de Cali...*", al considerar lo siguiente:

"Esta instancia judicial, por disposición del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, desde el 2 de julio de 2012 perdió competencia para conocer de procesos adelantados bajo el régimen escritural y solo le competen los adelantados bajo las disposiciones de la Ley 1437 de 2011, es decir, aquellos presentados a partir del 2 de julio de 2012". (fl. 358-359).

Finalmente, el **Juzgado Diecinueve Administrativo del Circuito de Cali**, mediante Auto del 08 de mayo de 2019, resolvió proponer el conflicto de competencia y en tal virtud, el proceso fue remitido a esa Corporación para lo pertinente (fl. 376).

2.3. De la remisión a este Despacho

Mediante acta de reparto del 10 de Julio de 2019 el proceso le correspondió al Despacho 12 - Magistrada Dra. Ana Margoth Chamorro Benavides- quien mediante providencia del 23 de julio de la misma anualidad remitió el proceso al Despacho 12 de esa Corporación, por haber conocido del asunto con anterioridad en segunda instancia (fl. 379); providencia notificada el 12 de agosto de 2019.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Marco normativo y jurisprudencial

De conformidad con el numeral 4º del artículo 123 de la Ley 1437 de 2011 en concordancia con el numeral 4º del artículo 41 de la Ley 270 de 1996, el Tribunal es competente para resolver el conflicto de competencias suscitado entre el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Cali y el Juzgado Diecinueve Administrativo del Circuito de Cali.

Para resolver el presente asunto, es menester mencionar la providencia del Consejo de Estado del 25 de julio de 2016¹, donde unificó el criterio frente a la

¹Sección segunda, No. Interno 4935-2014, C.P. William Hernández Gómez.

competencia de los jueces en materia de ejecución de sentencias judiciales y sentó las siguientes directrices:

"(...)

3.2.5. Conclusiones.

En relación con la ejecución de las sentencias de condena a entidades públicas, se concluye lo siguiente:

a. Las sentencias judiciales tienen un procedimiento especial de ejecución que se sigue a continuación del proceso en el cual se origina el título, cuya regulación parte de los artículos 306 y 307 del CGP, y se complementa con las reglas propias del proceso ejecutivo previsto en el artículo 422 y siguientes del mismo estatuto.

b. Para ello y en el caso de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, quien obtenga una sentencia de condena a su favor puede optar por:

1. Iniciar el proceso ejecutivo a continuación del ordinario, para lo cual debe:

- Formular demanda para que se profiera el mandamiento ejecutivo de acuerdo con lo expuesto en la parte resolutive de aquella y en la cual se incluyan los requerimientos mínimos indicados en el aparte 3.2.4. de esta providencia.

Es decir, el hecho de que se inicie el proceso ejecutivo a continuación del proceso ordinario no quiere significar que se pueda presentar sin ninguna formalidad y el ejecutante está en la obligación de informar si ha recibido pagos parciales y su monto.

- En este caso no será necesario aportar el título ejecutivo, pues este ya obra en el proceso ordinario.
- El proceso ejecutivo se debe iniciar dentro del plazo señalado en los artículos 192 de la Ley 1437 de 2011, en concordancia con los artículos 306 y 307 del Código General del proceso.

2. Si lo prefiere el demandante, puede formular demanda ejecutiva con todos los requisitos previstos en el artículo 162 del CPACA, a la cual se debe anexar el respectivo título ejecutivo base de recaudo, es decir, la sentencia que presta mérito ejecutivo con todos los requisitos de forma y de fondo exigidos por la ley.

En este caso el objetivo será que la sentencia se ejecute a través de un proceso ejecutivo autónomo de conformidad con el Libro Tercero, Sección Segunda, Título Único del Código General del Proceso, relativo al proceso ejecutivo, en aplicación de la remisión normativa regulada por el artículo 306 de la Ley 1437 de 2011.

c. En cuanto al punto relacionado con la competencia, en ambos casos la ejecución debe tramitarla el juez que conoció el proceso en primera instancia, así este no haya proferido la sentencia de condena; lo anterior, con el fin de preservar los objetivos perseguidos con el factor de conexidad ya analizado.

RADICACIÓN:
ACCIÓN:
DEMANDANTE:
DEMANDADO:
Pág. No. 7 de 10

76001-33-31-006-2008-00097-0
EJECUTIVO
MIGUEL FERNÁNDEZ SARRIA
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA



d. Cuando se trate de títulos ejecutivos diferentes a la providencia judicial, la competencia sí se define por el factor cuantía previsto en los ordinales séptimos de los artículos 152 y 155 del CPACA. Tal es el caso de (i) un laudo arbitral, puesto que los árbitros no tienen competencia para la ejecución de sus providencias; (ii) los derivados de los contratos estatales que comprende la ejecución de los actos administrativos expedidos en su ejecución.

En estos casos, por no existir un juez contencioso administrativo del que provenga el título, será menester determinar la competencia con base en este criterio; esto es, si la cuantía excede de los 1500 salarios mínimos legales mensuales vigentes el asunto corresponderá al tribunal, de lo contrario, será de conocimiento de los juzgados administrativos.

e. Todo lo anterior difiere de la solicitud de requerimiento para el cumplimiento de la condena al pago de sumas de dinero prevista en el artículo 298 del CPACA en armonía con los ordinales 1.º y 2.º del artículo 297 ib.

3.2.6 Cuestiones accesorias frente a la tesis adoptada.

Realizadas las anteriores precisiones, es oportuno señalar que en el campo de aplicación de las normas a las que ya se hizo referencia, se pueden presentar los siguientes eventos al momento de determinar la competencia para conocer de un asunto:

a) Puede ocurrir que el Despacho que profirió la sentencia de condena haya desaparecido para el momento en que regresa el expediente del trámite de segunda instancia, caso en el cual la competencia la asumirá el que corresponda de acuerdo con la redistribución o reasignación que se haya dispuesto de los asuntos que este conocía, por parte de la Sala Administrativa del Consejo Superior o Seccional de la Judicatura.

b) Si el proceso se encuentra archivado y ocurre la desaparición del despacho que profirió la condena, la competencia para conocer del proceso ejecutivo le corresponderá a aquel que se determine de acuerdo con el reparto que efectúe la oficina encargada de ello, en el respectivo Circuito Judicial o Distrito Judicial, según el caso.

c) Ahora bien, en el caso de los procesos fallados en vigencia del régimen anterior, esto es, el Decreto 01 de 1984, pero cuya ejecución se inició bajo las previsiones del CPACA, el procedimiento a seguir es el regulado en este último y en el CGP, puesto que, pese a que la ejecución provenga del proceso declarativo que rigió en vigencia del Decreto 01 de 1984, el proceso de ejecución de la sentencia es un nuevo trámite judicial.

Lo anterior, porque aunque se realiza a continuación y dentro del proceso anterior, tiene características propias y diferentes, en tanto que además de que originalmente no es de carácter declarativo, en el mismo se pueden presentar excepciones que originan un litigio especial que da lugar a un nuevo

RADICACIÓN:
ACCIÓN:
DEMANDANTE:
DEMANDADO:
Pág. No. 8 de 10

76001-33-31-006-2008-00097-0
EJECUTIVO
MIGUEL FERNÁNDEZ SARRIA
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA



fallo o sentencia judicial (Art. 443 ordinales 3.º, 4.º y 5.º del CGP).” (Negrilla y subrayado de la Sala).

De conformidad con la *ratio decidendi* de la jurisprudencia, se concluye con certeza que en materia de distribución de competencias establecidas en la Ley 1437 de 2011², prevalece el factor conexidad para conocer de la ejecución de la sentencia a continuación del proceso ordinario que la origina -*artículos 297, 298 y 299 del CPACA*-, estatuto normativo que considera la Sala aplicable también para la ejecución de las sentencias proferidas en vigencia del anterior ordenamiento (Código Contencioso Administrativo).

Ahora bien, esta Colegiatura en Sala Plena también se pronunció sobre la competencia de los procesos ejecutivo, indicando lo siguiente:

“ (...) en procura de lograr una redistribución equitativa de los procesos entre los jueces de este distrito judicial y; en aras de evitar una congestión innecesaria de sólo dos despachos³, lo cual iría en detrimento de la eficacia y celeridad que demandan las partes en la resolución de sus controversias judiciales, la Sala Plena del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, entiende que al margen de quién haya dictado la sentencia, será competente el juez al que inicialmente le fue asignado el asunto, pues fue aquél y no otro el auténtico juez del conocimiento, en claro respeto y acatamiento de la regla o el factor de conexidad en materia de competencia”⁴

3.2. Caso concreto

Conforme a los parámetros jurisprudenciales expuestos, la competencia para la ejecución de una condena debe radicarse en quien le correspondió el conocimiento del proceso de naturaleza declarativa en primera instancia, así este no haya proferido la sentencia de condena; lo anterior, con fundamento en el factor de conexidad.

En ese orden de ideas, se observa que el título ejecutivo base de recaudo es la sentencia emitida en primera instancia por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el día 01 de marzo de 2004 en vigencia del anterior ordenamiento y cuando no habían sido creados los Juzgados Administrativos del Circuito de Cali; providencia que fue confirmada y adicionada en segunda instancia por el H. Consejo de Estado mediante sentencia del 24 de mayo de 2005, dentro del

² Principio de conexidad: el cual interpreta que “el juez de conocimiento es el juez de la ejecución”, manifestación del legislador materializada, entre otros, en los artículos Num. 9 del Art. 156, 298 y Num. 2 del Art. 299 de la Ley 1437 de 2011.

³ De conformidad con el artículo 3 del Acuerdo PSAA15 del 30 de noviembre de 2015 “Por el cual se establece la transición entre los despachos de descongestión y los permanentes creados y se dictan otras disposiciones” y el numeral 3.2., de la Circular CSJVC15-145 de 2015 “Distribución de procesos”, se crearon dos despachos permanentes en el Distrito Judicial de Cali a los cuales les fueron asignados todos los procesos que estaban a cargo de nueve juzgados en descongestión.

⁴ Tribunal Administrativo del Valle del Cauca – Sala Plena – Providencia del 5 de abril de 2017 Rad: 76001-33-33-018-2016-00229-01 M.P. Fernando Augusto García Muñoz.

RADICACIÓN: 76001-33-31-006-2008-00097-0
ACCIÓN: EJECUTIVO
DEMANDANTE: MIGUEL FERNÁNDEZ SARRIA
DEMANDADO: DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
Pág. No. 9 de 10



proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación No. 2002-02087-00.

Ahora bien, para el momento en que fue radicada la presente demanda ejecutiva, esto es, el 17 de abril de 2008 (acta de reparto, fl. 41) ya existían los Juzgados Administrativos del Circuito de Cali y por tanto, conforme a la competencia por el factor cuantía la misma le correspondió por reparto al Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Cali, el cual tramitó el proceso hasta el momento en que fue enviado por última vez a esta Corporación para resolver sobre la apelación del mandamiento de pago y en donde el mismo, fue suspendido con ocasión al Acuerdo de Restructuración al que se sometió el Departamento del Valle del Cauca.

Entonces, si bien el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Cali no conoció del proceso ordinario y dentro del cual se profirió el título ejecutivo que origina la presente demanda, es evidente que a ese Despacho sí le correspondió el conocimiento del proceso ejecutivo desde su inicio, por cuanto la competencia le correspondía en primera instancia a los Juzgados Administrativos, y por tanto, el argumento bajo el cual manifestó que no era competente para seguirlo conociendo, una vez fue devuelto por esta Corporación, sobrepasa la finalidad de lo manifestado en Sala Plena en donde se indicó que remitir todos los procesos ejecutivos iniciados en el sistema escritural a los juzgados que conocen de ese sistema *"iría en detrimento de la eficacia y celeridad que demandan las partes en la resolución de sus controversias"* y congestionaría innecesariamente esos despachos.

En consecuencia, la competencia para tramitar la presente demanda ejecutiva queda radicada en cabeza del Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Cali.

En virtud de lo expuesto, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en Sala Plena,

RESUELVE:

PRIMERO: DIRIMIR el conflicto negativo de competencias suscitado entre los Juzgados Sexto y Diecinueve Administrativo del Circuito de Cali, en el sentido de **DECLARAR** que el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Cali, es el competente para conocer del proceso ejecutivo de la referencia, conforme a lo señalado en la parte considerativa de esta providencia.

SEGUNDO: REMITIR el presente proceso por la Secretaría de esta Corporación, al Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Cali para su conocimiento, previas las anotaciones de rigor en el Sistema Informático "Justicia Siglo XXI".

TERCERO: Comunicar esta decisión al Juzgado Diecinueve Administrativo del Circuito de Cali (V.), a quien se le remitirá copia de este Auto.

RADICACIÓN:
ACCIÓN:
DEMANDANTE:
DEMANDADO:
Pág. No. 10 de 10

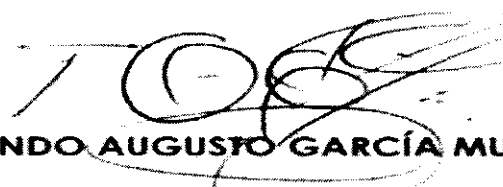
76001-33-31-006-2008-00097-0
EJECUTIVO
MIGUEL FERNÁNDEZ SARRIA
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA



Providencia discutida y aprobada en Sala Plena, según consta en Acta de la fecha (convocatoria de Sala Plena No.).


PATRICIA FEÜLLET PALOMARES


VÍCTOR ADOLEO HERNÁNDEZ DÍAZ
Magistrado


FERNANDO AUGUSTO GARCÍA MUÑOZ


EDUARDO ANTONIO LUBO BARROS


LUZ ELENA SIERRA VALENCIA



OMAR EDGAR BORJA SOTO

RADICACIÓN:
ACCIÓN:
DEMANDANTE:
DEMANDADO:
Pág. No. 11 de 10

76001-33-31-006-2008-00097-0
EJECUTIVO
MIGUEL FERNÁNDEZ SARRIA
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA




OSCAR SILVIO NARVÁEZ DAZA


ZORANNY CASTILLO OTALORA
Magistrada


ANA MARGOTH CHAMORRO BENAVIDES
Magistrada

2020en14